

“El nacionalismo. De la modernidad a la postmodernidad”, *Mar Oceana*
14-15 (2003) 65-78, ISSN 1134-7627

EL NACIONALISMO. DE LA MODERNIDAD A LA POSTMODERNIDAD

Francisco Javier Gómez Díez

Adrian Hastings ha defendido que la Edad Media europea entiende por *nación* un pueblo que se identifica por su idioma, leyes y costumbres, que este hecho se relaciona con el uso del término en los textos bíblicos y que el desarrollo escrito de las lenguas vernáculas favoreció el de las *naciones*. Sin embargo, la nación no pretendía reivindicar el ejercicio de la soberanía y el sentimiento nacional estaba lejos de haberse generalizado en el interior de cada unidad política. Cuando estos dos fenómenos — generalización y reivindicación soberana— se desarrollan podrá hablarse de una nueva etapa de la historia nacional, que impide remontar la *nación moderna* más allá de las revoluciones burguesas del cambio del siglo XVIII al XIX. Con independencia de que el desarrollo previo de identidades nacionales alimente el *nacionalismo*, en la Edad Moderna resulta más correcto hablar de *identidad étnica*, *fidelidad religiosa* y *lealtad monárquica*, siendo el único principio de constitucionalidad política con referencia universal el legitimismo monárquico. La novedad del concepto moderno de nación reside en el vínculo que establece entre el Estado y la Sociedad, apareciendo como legitimadora del primero e integradora de la segunda, en un esfuerzo, de clara raíz ilustrada, por afirmar la *emancipación* del mundo político. El Estado y la Sociedad son dos realidades distintas de difícil delimitación práctica, por estar sujetos a una fluida relación de mutua dependencia, donde la nación aparece como factor legitimador.

El *Estado* es la *comunidad políticamente organizada*; es el ámbito de la seguridad y el derecho, el instrumento que garantiza la posibilidad de la convivencia, al establecer los límites y las garantías de las libertades; el protector del orden social sobre la base del bien común. Reservándose el ejercicio de la soberanía, vincula a los miembros de la sociedad por medio de la ley y la obediencia para garantizar el ámbito de la libertad. En la relación del Estado y la Sociedad, la Nación —entendida en un

sentido amplio como esfuerzo democrático por participar— garantiza la integración política de los individuos y legitima la acción del Estado. La Nación, única soberana desde la tradición liberal contemporánea, se caracteriza por una cultura, por afirmar una continuidad histórica, un pasado que obliga, y una identidad activa (alguna forma de participación que se refleja en la toma de decisiones y en el logro de resultados) y, en último término, por reconocerse sus miembros como compatriotas. De esta forma, integra a la población que incluye, se afirma exteriormente en cuanto sujeto histórico e, incluso, alcanza una dimensión religiosa al pretender autofundamentarse.

La necesidad de la nación política y el drama excluyente de la nación étnica

El 11 de marzo de 1882, Ernest Renan afirmó: “Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas, que en verdad son sólo una, componen esta alma, este principio espiritual. Una de ellas pertenece al pasado, la otra al presente. La una es la posesión común de una herencia rica en recuerdos, la otra es el acuerdo presente, el deseo de vivir unidos... Una nación es, por tanto, una gran comunidad solidaria, sostenida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los sacrificios que aún se está dispuesto a hacer. Presupone un pasado, pero se resume no obstante en el presente en un hecho evidente: el acuerdo, el deseo expresado claramente de proseguir la vida en común” (*¿Qué es la Nación?*). Habla tanto de patrimonio, pasado y herencia como de futuro y participación. Aquellos que vieron en la participación, en el *deseo expresado claramente*, la característica de la conferencia, se asustaron; creyeron que conducía al principio de *autodeterminación*.

El planteamiento de Renan, perfectamente válido, requiere tener en cuenta que el elemento de la participación es previo, tanto en el hoy como con respecto al pasado, que debe ser una herencia cultural activamente asumida, no una esencia objetiva y permanente; que esta participación no puede fundarse si los individuos no comparten una determinada cultura, que nada tiene que ver con los rasgos formales y objetivos a los que en ocasiones se la reduce, y que es absurdo no tener en cuenta la existencia de comunidades políticas ya constituidas, lo contrario, un puro nacionalismo político, voluntarista, ajeno a la historia, tendría, por su carácter radicalmente revolucionario, una propensión natural al *terror*, contra el que es comprensible la reacción conservadora,

centrada en demostrar el carácter único de cada sociedad, y en la renuncia a aplicar categorías universales, abstractas, de una frialdad racionalista sumamente peligrosa.

Sin olvidar la situación de partida (en nuestro caso la existencia de una comunidad española siglos antes de la aparición del nacionalismo) y los factores que distinguen cada caso (baste señalar para el español, que considero más adelante, la falta de guerras internacionales, el impacto traumático de las carlistas o la decadencia del carlismo a partir de 1876 que conduce a muchos a redefinir sus posiciones políticas); puede afirmarse que el *nacionalismo* nace en una sociedad dominada por el cambio, en torno a la confluencia de tres procesos: 1) el Estado, para seguir proporcionando la seguridad y el derecho, puede y debe desarrollar en el mundo contemporáneo nuevos medios de control, movilización y formación y, vinculado a esta actuación, puede desatar reacciones defensivas en algunos grupos; 2) la Sociedad movilizadora como nunca hasta entonces y, por lo mismo, desarraigada, necesitada de nuevas formas de identidad y sentido, y 3) en relación con el esfuerzo estatal, la respuesta nacional, vinculada a la reacción —parcialmente religiosa— contra el desarraigo y el cambio amenazador, en situaciones de conflicto o en una profunda crisis de valores, en la que juega un papel muy importante el *trauma* de la Revolución y el grado en qué éste se vive.

Entre la Revolución Francesa y la Gran Guerra fue necesario asimilar cambios de una profundidad hasta entonces desconocida, y no sólo cambios: una nueva percepción del tiempo marcado por un acelerado proceso de cambios. Se multiplicó el número de los hombres. La migración nacional e internacional se generalizó. Se alteraron las demandas laborales (aparecieron nuevos trabajos y se introdujo una movilidad sociolaboral inimaginable hasta entonces por sus proporciones). Se multiplicó el intercambio de información y bienes procedentes de lugares cada vez más alejados y diversos. Todo se vio psicológicamente agravado por las dramáticas experiencias revolucionarias del siglo XIX, políticas y económicas, que hicieron sentir durante años el destino de Europa amenazado.

Esta profunda transformación generó, por un lado, una situación de desarraigo social y por otro, obligó a reinterpretar la acción del Estado. El desarraigo se vincula a la sustitución de la seguridad propia del Antiguo Régimen por la libertad económica, que introduce expectativas, movilidad profesional y riesgo; a la sustitución de los

lugares tradicionales de habitación por los efectos de la movilidad física, las migraciones y la apertura de espacios, y a la sustitución de las cosmovisiones tradicionales por la duda religiosa, una descristianización que fuerza a buscar nuevas respuestas de sentido, asociadas a la ideología revolucionaria, a la percepción del progreso como indefinido y a las místicas de grupo.

El sistema político debe reaccionar ante esta revolución; el Estado —el aparato de poder y la sociedad políticamente organizada— debe intervenir más activamente en todos los ámbitos sociales, tiene los medios para hacerlo, gracias a la gran revolución técnica y económica, y debe hacerlo para garantizar el orden social. Debe responder a las demandas, implícitas y expresas, de la sociedad; debe incrementar su control sobre una sociedad mucho más movilizadora y debe lograr una legitimación que cubra todas las restantes ideologías, las enmarque y, al mismo tiempo, asegure al Estado la aprobación de sus ciudadanos: esta legitimación será la idea de nación.

En primer lugar, estrechamente unido a la nueva política de masas se encuentra un intervencionismo estatal centrado en la política de bienestar y la integración del pueblo. Surge el estado de bienestar en su forma moderna: con el desarrollo de legislación social, sistemas de asistencia ante el imprevisto y lo inevitable y la garantía de servicios sociales no rentables para la iniciativa privada (sanidad, educación, infraestructuras, etc.). Por otro lado, el Estado asume un papel más activo en el proceso educativo, como forma de garantizar el cambio y el control político. El nuevo sistema caracterizado por la innovación, el progreso y los cambios requiere de una educación estándar y general, capaz de preparar para la movilidad profesional. Un sistema educativo donde, siendo imposible la autorreproducción cultural y profesional, basada en la acción del padre, el sacerdote y, si acaso, el maestro de oficio, se fortalece la función del Estado. Además este sistema exigía, o por lo menos se simplificaba con una lengua nacional de instrucción. Los regímenes políticos se apropian y fomentan símbolos y ritos de pertenencia, mediante el fomento y control de un sistema educativo institucionalizado, el servicio militar y las grandes ceremonias del nacimiento, el matrimonio y la muerte. El análisis para el caso francés realizado por Eugen Weber es en todos los sentidos muy ilustrativo, de los esfuerzos y de las grandes dificultades.

En la construcción de la identidad nacional juegan tres factores: el desarraigo, la necesidad de sentido y la acción propagandística que, interpretando el pasado, moviliza políticamente. La gran ciudad manifiesta este proceso. Hija del ferrocarril, que permite transportarse cantidades suficientes de alimentos, combustible y otros artículos voluminosos y concentrar las fábricas, es el lugar del desarraigo: la vida en la ciudad es impersonal y anónima; la gente está menos unida al hogar y a la iglesia que en el campo; los campesinos recién llegados (que han alterados sus formas de vida), están hambrientos de novedades. El nacionalismo es estimulado por la vida de la ciudad, donde los individuos se sienten cada vez más apartados de todas las instituciones, excepto del Estado. Los llamados patrióticos al alistamiento voluntario en defensa de la patria militarmente amenazada reciben los mayores grados de respuesta en las zonas más industrializadas y urbanizadas.

No todo es acción del Estado. La *nación* proporciona valores comunitarios que, transmitidos de generación en generación, alejan al individuo del desamparo, proporcionándole modos de ser y obrar. Incluso, en la radicalización emancipadora del mundo moderno, la idea de la nación tiene resonancias religiosas. El nacionalismo es — junto a las teorías revolucionarias— la religión secular de la era industrial: el Estado ya no recibe su justificación de Dios, sino de la Nación. La formidable capacidad del nacionalismo para el desarrollo de identidades colectivas le capacitará especialmente para cubrir el vacío religioso, al permitir a los individuos olvidar su contingencia y que su cultura, la más intrínseca experiencia humana no es natural sino inventada.

De esta forma el *nacionalismo* es una respuesta a los procesos de *modernización*. El incremento de las potencialidades sociales, acelerado por la competencia internacional, se manifiesta en un proceso de modernización, acompañada de una respuesta nacionalista que integra a la sociedad, arraiga al individuo y legitima la acción del estado. El Estado, para seguir siendo, responde a una doble necesidad: por una parte, el servicio a la sociedad, y su control, y por otra, el desarrollo de una nueva identidad, y la legitimación de la acción política. Esta respuesta se desarrolla, a su vez, por una parte en el incremento del poder coercitivo (desarrollo de la administración policial, impositiva, judicial, etc.), por otra, en el desarrollo de las líneas de movilización y participación política (libertades políticas, derechos, legitimación nacional, etc.) y, por

último, en la respuesta a las demandas y necesidades sociales (desarrollo económico, educación, seguridad social, etc.). Si la sociedad, o parte de ella, no experimenta las tres líneas de actuación del Estado como una sola actuación equilibrada, no se identificará con el proyecto político – nacional que éste defiende y podrá buscar proyectos nacionalizadores alternativos, en la medida en la que goce de elementos propios de identidad, factores de diferenciación o un desarrollo significativo.

Es decir, la existencia de las naciones depende de la capacidad del proyecto político para resolver las rivalidades y los conflictos entre los grupos, para garantizar las demandas sociales en torno a la seguridad, la continuidad, la legitimidad, la participación y la libertad —considerando, por supuesto, que su éxito depende de su coincidencia con la realidad tal como es percibida por aquellos a los que se dirige (la agitación nacional tiene que contar con el desarrollo de ciertas relaciones y vínculos seculares de unidad en el pueblo al que se dirige)— y así permitir una legitimación, una aceptación social del Estado existente y del proyecto nacional propuesto, que dependerá del equilibrio alcanzado entre las demandas del Estado y los servicios que ofrece.

Por lo tanto cabe intuir que la *ideología de la nación étnica* ha sido el medio de justificar el fracaso de la *nación política*. Se ha sustituido un difícil proyecto político, la voluntad de vida en común, por la pertenencia objetiva, a la que uno no debe integrarse, sino que pertenece. Se ha pretendido hacer de la étnica (llamada ahora nación y entendida como algo dado, por mucho que no lo sea) el único agente legítimo de autoridad, forzando a una exclusión que permite afirmar que todo nacionalismo étnico es antidemocrático. Este planteamiento etnicista se queda en el ámbito de lo inmediatamente dado —raza, lengua, religión, folklore...— para asegurar, aferrándose a esa referencia colectiva, dos sentimientos cruciales en la formación de la personalidad: la identidad y la autoestima. El nacionalismo étnico es mucho menos exigente, desde todos los puntos de vista. Psicológicamente, frente al desafío difícil de asumir lo propio y, por lo tanto, someterlo a discusión e, incluso, capacitarnos para aceptar lo ajeno, el etnicismo, desde su pretendida objetividad, da por hecha la pertenencia y, en contrapartida, genera la exclusión. Políticamente, frente al compromiso y el riesgo, el etnicismo permite, como ha denunciado Uriarte, permanecer constantemente en la oposición, en la posición de denuncia victimista caracterizada por Jon Juaristi.

La cuestión nacional nos enfrenta así a dos problemas de índole distinta: el problema político de la convivencia y el problema historiográfico de la construcción de las naciones. ¿Dónde radica el problema de la convivencia?

Una nación no es un ser social objetivo, es la progresiva asunción colectiva de un referente ideológico construido con distintos elementos, ideales unos, reales y más o menos idealizados otros. Los rasgos culturales objetivos (cualquiera de ellos: lengua, raza...) no sirven para clasificar de forma incuestionable a la humanidad en grupos étnicos. Como objetivamente no es posible determinar que pueda ser esa nación étnica, el nacionalismo escapa hacia delante con dos respuestas excluyentes: la raza o el suelo, que afirmándose objetivos pretenden ser indiscutibles y, por lo tanto, sólo pueden agravar los conflictos. En contrapartida cabe defender un proyecto, que en España se dibuja sobre el fondo de la tragedia vasca, el fortalecimiento de una identidad nacional plural: afirmar la necesidad y la posibilidad de reforzar la nación española.

El “fracaso” español

En España al concluir el siglo XVIII existe una identidad española, una homogeneidad institucional superior a la Francia prerrevolucionaria y una integración, vinculada al lento progreso económico favorecido por la monarquía, de las élites regionales; fenómeno compatible con el hecho de que los catalanes, considerándose súbditos leales de la monarquía española, rechacen ser identificados, en lengua y leyes, con Castilla. Aun así la pretensión centralista gaditana contó con apoyo vasco y catalán.

El conflicto con Francia fortalece esta identidad y favorece el desarrollo de un espejismo nacionalista: tras *la Guerra de la Independencia* (y teniendo presente una historia secular) resultó evidente la existencia de la identidad española y, por lo tanto, innecesario movilizar a las masas en un sentido nacional. Se ignoró la máxima paradoja del nacionalismo, que considerando a la nación una realidad natural, se sabe obligado a cultivarla o formarla; si las naciones fueran las realidades básicas en que se asienta la historia, el sentimiento nacional surgiría de forma natural y no habría por qué inculcárselo a los individuos. De todas formas, si en España no se hicieron estos esfuerzos no fue sólo por el impacto de 1808. El problema es muy otro.

El nuevo régimen nació en una coyuntura de ruptura. *La profunda división política que caracteriza a nuestra sociedad, íntimamente unida a la reducida base social del liberalismo*, se estructura en torno a varias líneas de tensión, que, teniendo cada una de ellas una fase de mayor intensidad, se solapan y complican mutuamente:

- *La tensión secular entre el reformismo y la revolución*, que tiene en Jovellanos su primera manifestación. Enfrentado a los planteamientos reaccionarios de un Fornes y a los revolucionarios de un Cabarrus, Jovellanos defiende un reformismo profundo desde un planteamiento conservador que, emparentado con Burke, rechaza la teoría pactista sobre el origen del poder y afirma la necesidad de construir frente a revolucionarios y absolutistas una sociedad reformista y liberal; a lo largo de dos siglos, entre la reacción asustadiza y la pretensión revolucionaria, las actitudes reformistas han dado, en medio de muchas dificultades, los mejores frutos.
- *El choque entre el liberalismo y la contrarrevolución*, manifestada principalmente en las guerras carlistas (1834-39, 1845-9, 1872-76), pero presente en tantas otras ocasiones hasta hoy.
- *La división liberal entre doctrinarios y progresistas*, que tiene entre 1843 y 1868 su principal fase de manifestación y que pasa a un segundo plano, si bien no desaparece, cuando en 1868 los conservadores renuncian a las reticencias manifestadas hasta entonces en torno al significado político de la idea nacional, en gran medida por el impacto de la Comuna y la Internacional, y cuando, en 1884, Sagasta acepta explícitamente (en la práctica lo había hecho antes) la tesis canovista de la función soberana del Monarca.
- *El conflicto entre las pretensiones del liberalismo económico y la utopía revolucionaria igualitaria*, que anunciada con claridad en el *Sexenio*, no deja desde entonces de agravarse hasta su culminación en 1917, 1934 y 1936.
- *El objetivo secularizador y las pretensiones del catolicismo nacional*, presentes ya en la *Constitución de Cádiz*, radicalizándose progresivamente en torno al problema educativo, con una brillante manifestación en la réplica de Castelar a Vicente Manterola, y llevado a su máximo paroxismo de violencia en 1931 y 1936.
- *Y el cuestionamiento de la monarquía como símbolo de la unidad patria.*

Estas profundas divisiones en la sociedad llegan incluso a provocar una falta de acuerdo sobre los símbolos mismos de la nación, al tiempo que los sectores enfrentados al liberalismo encuentran razones para acusar al proyecto modernizador de adoptar acriticamente modelos exógenos contrarios a la tradición.

La revolución liberal, que ha multiplicado los motivos de marginación, apoya su triunfo en una minoría a su vez dividida. El grupo que se ha hecho con el poder durante la menor edad de la reina Isabel, estructurado en torno a la alianza de la alta burguesía y la gran nobleza terrateniente, tiene una concepción de la modernización muy diferente a la que defiende la escasa burguesía industrial española. Esta escasa base de apoyo genera un miedo que, dada la debilidad del Estado, no puede paliarse con un decidido y constante proceso de movilización e incorporación política de la sociedad, con independencia de que esta política de movilización exigiría unas reformas profundas que alterarían las condiciones sobre las que sustentan su predominio los grupos en el poder.

La pieza esencial es, por tanto, *la dramática debilidad del Estado*, unida insensatamente a una pretensión centralista de influencia francesa. Un Estado débil que no tiene medios de control, formación y movilización política y, por lo mismo, reduce su presencia a una función coercitiva que muchos ven como una invasión extraña; un Estado débil temeroso de favorecer una integración política activa y, por lo mismo, sustentador de la identidad sobre una imagen dada de la nación como fruto exclusivo de la historia y no adquisición popular¹, y un Estado obsesionado por la homogeneidad, explicada tanto por la influencia francesa, como por el interés conservador por no fragmentar y debilitar el Estado.

La construcción político-administrativa del Estado español se desarrolla, en primer lugar, por medio de la homogeneidad jurídica y territorial. El monopolio del castellano se establece en la enseñanza en 1857 (ley Moyano), en todos los instrumentos públicos en 1862 (ley del notariado) y en el Registro Civil en 1870. La Restauración refuerza la planta centralista del Estado y la ley provincial de 1882 establece el carácter

¹ En este sentido es sintomática la idea nacional de Canovas, sobre la que apuntó acertadamente Díez del Corral que para obrar con eficacia unificadora evitó proyectarla sobre el futuro incierto, refugiándose en la solidez del pasado inamovible.

exclusivamente administrativo de las Diputaciones provinciales. En la práctica la estructura fue menos sólida de lo que las leyes pretendieron, como consecuencia de un gasto público muy inferior al de otros países europeos, una fiscalidad directa muy baja y unas reducidas partidas e inversiones en obras públicas² o educación.

La administración, que se desarrolla al servicio de los partidos gobernantes, está muy escasamente profesionalizada y carece, por lo mismo, de la autonomía necesaria; apenas funciona como transmisora de las demandas sociales hacia el poder; una parte importante de sus empleos civiles están ocupados por militares³; su misma debilidad e ineficacia la incapacita para hacer frente a los poderes locales y particulares (en este sentido el caciquismo no es sólo una muleta electoral ante la pasividad social), cayendo sistemáticamente en la corrupción y, por lo tanto, manifestándose incapaz de generar confianza en la sociedad.

El Ejército tampoco puede ayudar. Lo impide la forma clasista de reclutamiento y las condiciones de vida de la tropa acuartelada. En lugar de fomentarse el nacionalismo por medio de la incorporación al ejército, se alimentaba un intenso antimilitarismo popular, al que contribuye la progresiva utilización del ejército como instrumento represivo, frente a la violencia social y política; utilización que se asocia a la inexistencia de una policía eficiente y a la incapacidad o falta de voluntad para hacer frente a las demandas sociales con algo más que *palo*, como lamenta el Capitán General Aguilar en 1911. Por supuesto, la falta de grandes causas exteriores y la multiplicación de los conflictos civiles contribuían a dificultar la función nacionalizadora del ejército; en este sentido el conflicto cubano se vio más como un conflicto civil que internacional.

Con relación al sistema educativo, la Ley Moyano establecía todo un plan de nacionalización de las masas, pero, no pudiendo sufragar el gobierno central los gastos, decretó que los obligados a erigir y sostener las escuelas de enseñanza primaria serían

² En 1910, todavía hay 4.011 pueblos sin comunicación, de un total de 9.266; el 20 % de la población.

³ En 1885 los pagos militares representan el 49 % del capítulo de personal del presupuesto estatal y, entre 1850 y 1890, el Ejército, la Marina y Gobernación gastan el 60 % del presupuesto del Estado. Aun así la Guardia civil, con 18.000 hombres en 1900, no podía cubrir todas sus obligaciones.

los propios municipios —a los que la desamortización acaba de privar de buena parte de sus rentas— y que las diputaciones provinciales se harían cargo de los institutos de enseñanza media. Como resultado en 1900 casi la mitad de las escuelas previstas seguían sin existir, el 60 % de la población infantil no estaba escolarizada⁴; la responsabilidad municipal favorecía la supervivencia de lenguas regionales y la mayoría de los que sabían leer y escribir habían estudiado en instituciones privadas, sobre todo católicas.

Mientras en toda Europa se desarrolla un proceso de movilización nacionalista, en España se ha renunciado a este esfuerzo. No se trata de inventar la nación, sino de construir, con las tradiciones culturales adecuadas, la integración activa de la población en la comunidad política. Entregar la educación a la Iglesia —antiliberal, enemiga del regalismo y sus derivados, idealizadora de una Edad Media ajena a la idea de Estado Moderno y en modo alguno reacia a usar las lenguas regionales⁵— no era la mejor forma de facilitar la integración nacional. Por su parte, las experiencias educativas protagonizadas por la izquierda socialista defendían posturas internacionalistas, revolucionarias y antiestatalistas.

Con una sociedad muy dividida políticamente y un estado desestructurado, volcada la idea de nación sobre el pasado, era comprensible la conversión de la Historia de España en batalla político educativa, como ha estudiado brillantemente Carolyn P. Boyd.

En último término, el reformismo social impulsado por el estado es, en comparación con lo realizado en otros países europeos, tardío, tímido y, por lo tanto, de resultado limitado. Los políticos que percibieron el problema no fueron capaces de enfrentarse con éxito a las inercias heredadas.

Es decir, el Estado en principio ha fracasado en el esfuerzo de establecer una vinculación ideológica, legitimada por medio de una invocación nacional, entre las

⁴ En Italia los analfabetos eran un 50 %, el 17 en Francia y el 5 en Inglaterra y Alemania. Mientras el Estado español dedicaba a educación un 1,5 % de su presupuesto, Alemania destinaba en las mismas fechas un 12 %.

⁵ Un hombre tan significativo como el P. Claret no dudaba en proclamar: "Seguid predicando en castellano, que ellos blasfeman en catalán y se condenarán en catalán".

libertades individuales y la participación política, el progreso, la modernización y la promoción social y, por último, la lengua y la cultura. En Francia —en una fase de crecimiento económico y presencia exterior del Estado— una revolución profunda sustituyó la identidad local por otra nacional, con un pueblo que se sentía participe y responsable de unos símbolos y unos derechos.

Las desigualdades regionales con respecto al grado de modernización jugaron también un papel capital. Las zonas de mayor desarrollo, localizadas en algunas regiones determinadas, no se correspondieron con la localización de los centros de decisión política; frente al centro con poder político pero poco dinámico, surge una periferia con dinamismo económico, pero sin poder político. La población de la periferia se organizó políticamente antes y se sintió ignorada por la política madrileña, que se sostenía sobre el control de una sociedad mayoritaria escasamente movilizada. Por otra parte, se desarrolló un temor a la pérdida de identidad como producto de la *modernización*. Cristalizó así un movimiento de afirmación de la identidad que, paradójicamente va, no contra la modernidad, de la que no se quiere prescindir, sino contra el poder central, al que se culpa de aquella pérdida de identidad. Este proceso generó reacciones de fanatismo disgregador, como la de Arana, y esfuerzos por influir en la política madrileña y redefinirla, como intenta la *Lliga Regionalista*.

La *profunda tensión de carácter nacionalista que enfrenta al centro y a la periferia después de 1898* dificulta cualquier proceso de entendimiento entre los intereses estatales y los regionales. A principios se funda en Cataluña la *Lliga* y la burguesía toma el control del PNV en contra de los planteamientos originales de Sabino Arana. Frente a la vergüenza nacional, el 98 genera una actitud diferenciadora de *nosotros no*, y los catalanes intentan ponerse al frente de una cruzada salvadora: *España resucitará transfigurada por Cataluña*. Sin embargo, la reacción del nacionalismo español herido por la derrota hace difícil cualquier entendimiento. Se observa un gran interés por la cuestión nacional, pero es tarde y en rivalidad abierta con el regionalismo. Importantes sectores de la intelectualidad española de comienzos del XX, identificados con el noventaiochismo, el regeneracionismo y los grupos influidos por Ortega, al

tiempo que deslegitiman insensatamente el régimen establecido⁶, se manifiestan insensible hacia las reivindicaciones y posturas del regionalismo, identificando España con Castilla. El malestar alcanzaría su máxima intensidad en la crisis general de 1917, donde para muchos se vincula la revolución social y el regionalismo. Sólo la evolución de los otros graves problemas (Marruecos y el problema social), relajo la tensión, echando al la burguesía catalana en brazos del ejército⁷. Esto no evito que el nacionalismo español se cerrara en banda a cualquier concesión a los regionalistas.

Al tiempo que se produce una reconstrucción y fortalecimiento del Estado como no se había dado en todo el siglo XIX, la política nacionalista del régimen de Franco, centrada en torno a una idea de la *antiespaña*, que excluía por igual a nacionalistas y a marxistas, tendrá graves consecuencias a largo plazo. Junto al complejo de culpabilidad que afectó a las derechas durante la transición, la tradición centralista de la izquierda se verá debilitada, al identificarse el nacionalismo español con Franco y al favorecerse la colaborando con el nacionalismo en la lucha contra la dictadura. El objetivo de acabar con el franquismo hace irrelevantes las grandes diferencias ideológicas, y permite alianzas entre la izquierda socialista y comunista (justificado desde una absurda identificación con los pueblos del Tercer Mundo) y los nacionalistas, que se ha prolongado en la medida en la que aquélla sigue nutriéndose de las divisas y los mitos del 68. De esta forma la izquierda fue incapaz de hacer frente —al igual que la derecha— a los mitos nacionalistas que presentaron la guerra civil como una lucha contra las libertades nacionales, cuando los grupos vascos y catalanes, y sus respectivas sociedades se dividieron en torno al 18 de julio tan profundamente como el resto de España.

Conclusiones

⁶ Se puede observar una trágica continuidad —alimentada por múltiples factores— desde Macías Picabea, al *delenda est Monarquia* y a la Guerra civil.

⁷ La relación del mundo catalán y del catalanismo con el ejército estuvo marcada por la ambigüedad; el catalanismo, y sobre todo su intelectualidad, manifestó un sentimiento de desprecio y miedo hacia el ejército.

Asumiendo el *fracaso* en su grado exacto y, reconociendo que los nacionalistas no pueden ser satisfechos, debe afirmarse un problema político: después de 25 años, el sistema autonómico, uno de los más descentralizados del mundo, no ha sido capaz de cumplir su máximo objetivo político: integrar al nacionalismo vasco. Principalmente en los territorios donde la sociedad está más profundamente dividida, el nacionalismo político es una necesidad y el Estado —insisto: la comunidad políticamente organizada— debe reconocer y asumir sus responsabilidades: debe reconocer que la nación española existe, es una gloriosa creación de la Monarquía, y debe seguir existiendo, no disolverse en un conflicto violento o cruento —no sólo lo cruento es violento— de imprevisibles consecuencias, y debe reasumir la principal responsabilidad de la que hizo dejación en los años ambiguos y tímidos de la Transición: la educativa. Pero el problema es más grave: el *nacionalismo político* tiene dificultades para satisfacer las demandas psicológicas a las que el *nacionalismo étnico* responde.

La tragedia del nacionalismo se ve agravada por un fenómeno que afecta a todo Occidente y podríamos denominar la *muerte de la Historia*. Olvidada la confianza ilustrada en el *progreso*, en un mundo donde el cambio introduce desconfianza, ambigüedad y aprensión —pensemos en la forma tan distinta de asumir hoy y hace un siglo los avances científicos— el *nacionalismo* se afirma irracionalmente en lo que cree esencial y permanente. En la medida en que los proyectos políticos de la Modernidad, arraigados en una racionalidad progresista, entran en crisis se radicaliza el esencialismo etnonacionalista. Agravada la situación por el hecho de que la Modernidad fue acompañada de un proceso descristianizador. No he querido hablar de la responsabilidad eclesial en el desarrollo de actitudes nacionalistas —y aun menos de la más elemental y minoritaria: la justificación de ciertas actitudes violentas—, lo que realmente me interesa es la dificultad para mantener la vigencia social⁸ de una tensión que caracterizó durante siglos la civilización cristiano occidental. Una vez que la modernidad arrumbó las concepciones filosóficas y antropológicas que la sostenían, sin

⁸ Las diócesis vascas, por ejemplo, tradicionalmente ricas en vocaciones sacerdotales, son hoy de las últimas en seminaristas por número de habitantes. De las 67 diócesis españolas, Vitoria —la menos nacionalista— ocupa el número 38, San Sebastián el 57 y Bilbao el 64, significativamente sólo por delante de Gerona, Ibiza y Lérida.

que la Iglesia, acosada y asustada, fuera capaz de responder osada y originalmente, se ha diluido la tensión entre el universalismo de raíz cristológica y la afirmación del valor de lo concreto, de lo peculiar y particular, que se alimenta de la misma experiencia del Dios encarnado⁹. Rota esta tensión, que era tan necesaria como conflictiva, la *posthistoria* ha sacralizado el valor de la tribu y el nacionalismo se levanta como una religión de sustitución. La religión sobrenatural es extirpada y se transfiere la sacralidad a un nuevo objeto de culto (Izaskun Sáez de la Fuente Aldana). El nacionalismo étnico es contrario a la mentalidad histórica. La historia es para él un recurso, una fuente de legitimidad, que no fuerza a asumir procesos, desafíos y cambios, y donde sólo se busca el *mito primigenio* propio de una mentalidad metafísico-esencialista.

⁹ Se trata de una mentalidad histórica y una concepción universalista, manifestada en casos concretos que alcanzan su valor y dignidad en referencia a esa universalidad. Una tensión cuyo soporte religioso se establece en la creación en Cristo (Jn 1, 1-5) que relativiza todas las diferencias (Gal 3, 26-28) y en la presencia permanente de las *naciones* en los textos bíblicos y la llamativa diferencia que, por ejemplo, con la religión islámica y el carácter sagrado del árabe, tiene la actitud ante las lenguas del cristianismo (Hch 2, 7-11), reflejada en la posición de Claret antes señalada (nota 5).